

9 de mayo de 2007**Más información (actualización núm. 1) sobre AU 100/07 (AMR 51/080/2007, del 27 de abril de 2007) –
Penas de muerte / preocupación jurídica****EE. UU. (Tennessee)****Philip Workman, blanco, de 53 años de edad**

Philip Workman fue ejecutado mediante inyección letal en Tennessee en la madrugada del 9 de mayo, pese a las pruebas que indicaban que un testigo de cargo clave mintió en el juicio y que el teniente Ronald Oliver, el agente de policía por cuya muerte durante un robo en 1981 se condenó a Workman, pudo haber recibido accidentalmente un disparo de otro agente. Philip Workman estuvo 25 años en el “corredor de la muerte”.

El 4 de mayo, un tribunal de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, corte federal, denegó la petición de Philip Workman de que se suspendiera su ejecución para proseguir con su alegación de inocencia. Dos de los jueces resolvieron que Workman no había “cumplido con su deber de demostrar una probabilidad de éxito” respecto a su apelación. También dijeron: “Casi 25 años después de la condena a muerte de Workman, y tras cinco suspensiones de la ejecución, tanto el estado como la opinión pública tienen interés en una solución definitiva”. El tercer juez –el juez Cole– discrepó de la negativa a suspender la ejecución. Alegó que Workman había “demostrado de la forma necesaria” que tenía probabilidades de tener éxito, al menos en su intención de obtener una vista probatoria sobre su alegación, y que eso bastaba para justificar una suspensión. El juez Cole señaló también que otro tribunal de tres jueces de la Corte del Sexto Circuito había concedido recientemente una suspensión de la ejecución a un condenado a muerte en circunstancias similares. Dijo: “Sencillamente no puedo concluir que esta contradicción en la administración de la pena de muerte sea permisible”.

En todo Estados Unidos siguen presentándose recursos judiciales contra la constitucionalidad de los procedimientos de inyección letal, entre las pruebas cada vez más abundantes que señalan que estos procedimientos no garantizan la muerte “humana” e indolora que sus defensores alegan, y que la combinación de sustancias químicas utilizada puede enmascarar el dolor del condenado durante la ejecución. El 1 de febrero de 2007, señalando que las autoridades del estado habían identificado “deficiencias” en los procedimientos estatales de inyección letal, el gobernador de Tennessee, Phil Bredesen, dictó una orden ejecutiva por la que se suspendían las ejecuciones mientras el Departamento de Prisiones llevaba a cabo un “estudio exhaustivo” sobre dichos procedimientos. El 30 de abril, el gobernador anunció que el estudio se había completado y que la suspensión de las ejecuciones expiraría el 2 de mayo.

Los abogados de Philip Workman presentaron una moción para pedir una orden de restricción provisional, con el fin de detener la ejecución en virtud del nuevo protocolo, por lo menos hasta que éste pudiera ser examinado judicialmente. El 4 de mayo, un juez federal de primera instancia concedió la moción y dictó una orden de restricción provisional hasta que se celebrara, el 14 de mayo, una vista sobre un mandamiento preliminar. El juez concluyó que Workman había demostrado una “probabilidad alta o sustancial de éxito respecto a su alegación de constitucionalidad”, y que el posible perjuicio que el gobierno pudiera sufrir por aplazar la ejecución hasta que se revisara detenidamente el nuevo protocolo de ejecución no era superior al perjuicio indiscutible e irreparable que sufriría Workman si la ejecución se llevaba a cabo. El juez añadió que al gobierno no le interesa “proceder con un protocolo de ejecución que, en última instancia, puede ser declarado inconstitucional”.

El 7 de mayo, el mismo tribunal de tres jueces de la Corte del Sexto Circuito que había denegado la suspensión de la ejecución para la alegación de inocencia anuló la orden de restricción provisional. Los dos

jueces de la mayoría manifestaron que “la orden del tribunal federal de primera instancia, si se confirmara, constituiría la sexta suspensión de la fecha de ejecución fijada para Workman por el estado durante los últimos siete años”. Los jueces concluyeron que “Workman tiene una reducida probabilidad de éxito respecto a esta cuestión, porque su afirmación no está respaldada por la ley actual, que no ofrece base alguna para concluir que los protocolos de inyección letal son inconstitucionales”. La resolución concluía manifestando que, “en algún momento, el Estado tiene derecho a imponer una condena, no sólo porque el interés del Estado en una solución definitiva sea acuciante, sino también porque existe un interés sólido y legítimo en castigar al culpable, y ese interés afecta por igual al Estado y a las víctimas del delito. Transcurridos 25 años desde la imposición de esta condena, consideramos que ese momento ha llegado”.

Una vez más, el juez Cole discrepó. Para empezar, alegó que, según las normas de procedimiento, la Corte no era competente para anular la orden de restricción provisional. Luego continuó: “Resulta igual de preocupante que, a pesar de las amplias y detalladas denuncias expuestas por Workman para demostrar que el nuevo protocolo de inyección letal de Tennessee le provocará un dolor y un sufrimiento que violan la Octava Enmienda, a pesar de que Workman respalda sus alegaciones con el testimonio de médicos familiarizados con los protocolos de inyección letal, estudios médicos y pruebas de ejecuciones fallidas recientes, a pesar de las declaraciones de tribunales federales de todo Estados Unidos que expresan hondo escepticismo respecto a protocolos similares de inyección letal adoptados por otros Estados, y a pesar de la deferencia que un tribunal de apelación debe a la resolución de un tribunal de primera instancia, la mayoría concluya que los motivos de preocupación de Workman no son lo bastante acuciantes como para merecer una breve preservación, de cinco días, del *statu quo* para determinar si sus alegaciones tienen fundamento [...] La mayoría esgrime el argumento no muy sólido de que ningún tribunal se ha pronunciado aún sobre si estos procedimientos de inyección letal violan la Octava Enmienda. Evidentemente, esto no es de extrañar, considerando que estas impugnaciones de la inyección letal están aún en su infancia [...] Por desgracia, la mayoría opta por impedir la limitada investigación –una investigación que no hace más que preservar el *statu quo* durante cinco meros días– que bien podría confirmar su conclusión de que Philip Workman no tiene nada que temer del nuevo protocolo de inyección letal de Tennessee. Las razones de la mayoría para hacerlo no son convincentes. Sea cual sea el perjuicio que el Estado pueda sufrir al dictarse la orden de restricción provisional –si es que se puede hablar de “perjuicio”–, éste palidece en comparación con el que sufre nuestra Constitución al permitir que un solo acusado perezca por un método de ejecución que viola sus derechos”.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó intervenir en el caso. Philip Workman fue declarado muerto a la 1:38 de la madrugada, hora local, del 9 de mayo.

Un estudio de reciente publicación realizado bajo los auspicios del Colegio Estadounidense de Abogados, que no adopta en sí postura alguna ni a favor ni en contra de la pena de muerte, ha concluido que “la pena de muerte en Tennessee está plagada de problemas graves”. Entre estos problemas, según concluyó el estudio, se encontraban unos procedimientos inadecuados para abordar las alegaciones de inocencia, unas normas inadecuadas de cualificación y actuación para la asistencia letrada, una falta de transparencia en el proceso de indulto, y disparidades raciales y geográficas en la aplicación de la pena capital.

El 2 de mayo, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Tennessee aprobó por unanimidad un proyecto de ley por el que se establecería una comisión encargada de revisar el sistema de aplicación de la pena capital en el estado. Si la Cámara realmente la crea, esta comisión incluirá representantes nombrados por el gobernador, el Senado y la Cámara, así como abogados y fiscales, activistas sobre cuestiones de salud mental y activistas de derechos de las víctimas. La comisión formularía a la Cámara recomendaciones sobre cómo abordar los problemas que identificara.

Philip Workman se ha convertido en el preso número 18 ejecutado en Estados Unidos este año, y en el número 1.075 ejecutado desde que Estados Unidos reanudó los homicidios judiciales en 1977. Tennessee ha dado muerte a tres presos desde que reanudó las ejecuciones en el año 2000.

No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos.